CONSIDERACIONES EN AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS ENTIDADES DEPORTIVAS DE ANDALUCÍA Y SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS.

Informe-propuesta que formula la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo, en relación con el trámite de audiencia pública de la disposición de la cabecera, por medio de sus ponentes D^a. Ana Mingorance Martín y D^a Carmen María Sáenz Rodríguez, sobre posibles enmiendas de los artículos **2.1; 5.2; 12; 13; 15; 16.1; 18; 26; 57.2; 62.1.b); 67.1 y 67.3**, así como el efectuado por el Dr. Javier Gómez Vallecillo, sobre el artículo **65** de la disposición.

Las aportación que se formulan se realizan bajo criterios de leal saber y entender de sus ponentes, que salvo error o involuntaria omisión, mejor derecho y mudando lo mudable, suscribe la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo (AADD), dando así oportuno cumplimento a los objetivos de sus estatutos fundacionales, con el único fin de contribuir en la medida de lo posible, a la mejor regulación del deporte en Andalucía, siempre desde un perspectiva meramente jurídica y al margen de cualesquiera otra circunstancia que no sea la estrictamente legal.

Ponencia informativa y con sugerencias de nueva redacción a cargo de la Vocal de la AADD, D^a. Ana Mingorance Martín y la Tesorera de la AADD, D^a. Carmen María Sánchez Rodríguez.

1

Introducción.

Las consideraciones que a continuación se detallan versan sobre diversos aspectos de la norma, que a nuestro juicio merecen una especial atención, por su transcendencia práctica, concreción del derecho que se pretende regular y su posible incidencia frente a terceros u otras ramas del derecho, afines al derecho deportivo, que pudieran presentar conflicto legal por desarmonización o incoherencia interna de la norma que se desarrolla con otros cuerpos legales.

Consideramos que se trata de una norma de desarrollo de la vigente Ley del Deporte de Andalucía, y como tal debe ser concreta y específica, evitando en lo posible reiteraciones innecesarias de la norma matriz de la trae su causa, en aras a su mayor operatividad y especificación.

El esquema que se propone consiste en una sucinta justificación de la propuesta de nueva redacción que se propone, a modo de enmienda, seguida de la propuesta de nueva redacción, de los artículos considerados, o en su caso, su supresión.

Así pues, los artículos que estimamos deben de ser especialmente considerados son los que a continuación de indican.

1.- Artículo 2.1 Sobre Definición y clases de las entidades deportivas andaluzas.

En su apartado 1 se dice: *“Son entidades deportivas andaluzas las que, constituidas al amparo de la Ley 5/2016, de 19 de julio, y del presente decreto, con domicilio en Andalucía y sin ánimo de lucro...”*

Entendemos que no todas las entidades deportivas que contempla la Ley del Deporte andaluza (clubes, secciones deportivas y federaciones deportivas) son concebidas necesariamente sin ánimo de lucro, como sería el caso de las secciones deportivas.

Así pues, la propuesta de enmienda que proponemos consiste en la supresión en el referido artículo la expresión *“sin ánimo de lucro”*, de suerte que el mismo podría quedar redactado de la forma que sigue:

“Son entidades deportivas andaluzas las que, constituidas al amparo de la Ley 5/2016, de 19 de julio, y del presente decreto, tengan domicilio en Andalucía....”

2.- Artículo 5.2.- Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas.

Dice este artículo: *“Las sociedades anónimas deportivas con sede social en el territorio de Andalucía, y sin perjuicio de regirse por la normativa estatal aplicable, deberán inscribirse en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas a los efectos de disfrutar de los beneficios previstos en la Ley 5/2016, de 19 de julio, y sus disposiciones de desarrollo”*.

Sobre este particular, debemos incidir en que las SAD no se consideran entidades deportivas a efectos de la Ley del Deporte andaluza, por tanto, no alcanzamos a comprender porque se incluye el apartado 5.2 para su inscripción cuando no son entidades deportivas andaluzas. Por tanto, el artículo 5.2 debería desaparecer.

Otra cosa es que no compartamos con la Ley del Deporte andaluza la exclusión de las SAD como entidades deportivas andaluzas. Entendemos que se debe aclarar el propósito de la Ley el deporte y su reglamento en este sentido.

Que ocurriría si una SAD, que por diversos motivos termina compitiendo en una competición regional o si quisiera participar en una competición no oficial, tendría que crear una sección deportiva para poder inscribirse en el registro de entidades deportivas. No tiene sentido. Una SAD con domicilio en Andalucía debe ser considerada a todos los efectos como una entidad deportiva andaluza.

3.- Artículo 12: Los derechos y obligaciones de los miembros del club.

El conjunto de derechos y obligaciones con los que pueda dotarse o auto regularse un determinado club deportivo, obedece a una parcela de derecho interno de cada club deportivo. Por lo que consideramos aventurado promover o dictar una intervención pública en dicha materia. Los derechos y obligaciones de los miembros del club deben regularse en los estatuto de cada entidad, y en cualquier caso, es responsabilidad de la Administración competente en materia deportiva que los estatutos no contengan devianaciones de legalidad, disposiciones contrarias a la ley u ostensible discriminación o parcialidad; pero de ahí a establecer el contenido de derechos y obligaciones que deben regir en los clubes deportivos andaluces, pudiera irrumpir en una manifiesta injerencia en el derecho de autorregulación que caracteriza este tipo de asociaciones.

Cuestión distinta sería la obligación y el derecho de los deportistas y técnicos de acudir a la selección deportiva andaluza cuando sean convocados. Esa obligación y derecho es adquirida con la ficha deportiva y por tanto estaría contemplado en esa relación club-deportista/entrenador-federación. Y todo ello no impide que los clubes para mayor información a sus miembros lo incluyan dentro de sus derechos y obligaciones.

Por esta razón, la enmienda que proponemos es la de suprimir el artículo 12 de la disposición, o en su defecto establecer únicamente, aquellos derecho y obligaciones que tengan relación con las convocatorias de selecciones autonómicas.

4.- Artículo 13: régimen patrimonial e ingresos de los clubes deportivos.

Proponemos su eliminación por innecesaria.

Los clubes deportivos como asociaciones que son tienen personalidad jurídica propia. Es decir, por su propia naturaleza jurídica, los clubes tienen capacidad jurídica para intervenir en el mundo, con derechos y obligaciones, sin necesidad de recogerlo en este texto.

En cualquier caso, serán los estatutos del club los que puedan restringir esta facultad, siendo la Asamblea General del club, la competente.

Artículo 13: Régimen patrimonial e ingresos de los clubes deportivos.

“En todo momento, el régimen patrimonial e ingresos de los clubes deportivos andaluces, se regirá por las normas de derecho común que sean de aplicación en materia de regulación civil, mercantil, laboral, fiscal, tributaria, ya sean de ámbito nacional, autonómico y de administración local, incluida la normativa de derecho internacional, que, llegado el caso, pudiera ser de aplicación.”

5.- Artículo 16.1: Régimen disciplinario.

Dice la norma que *“los clubes deportivos andaluces ejercerán la potestad disciplinaria deportiva sobre los miembros del club y personal directivo, técnico y de administración, de acuerdo con sus estatutos dictados en el marco de la legislación aplicable, excepto en aquello que pertenezca al ámbito del derecho privado. En tal sentido, los clubes deportivos deben regular en sus estatutos el sistema disciplinario interno que resulte de aplicación en el seno del club”*.

Entendemos que la actual redacción del precepto no aclara la diferencia entre potestad disciplinaria deportiva y la potestad disciplinaria interna del club. Creemos que en muchos casos un incumplimiento podría ser catalogado en ambos conflictos. La norma podría ser más explícita.

No aclara si el club debería tener dos procedimientos diferenciados, o con un procedimiento sería suficiente.

No es lógico que los clubes ejerzan potestad disciplinaria deportiva contra sus miembros. Pudiera ser que el resultado del conflicto le pudiera perjudicar ante la federación o incluso ante la administración, sería juez y parte.

Además, debemos tener en cuenta que los clubes deportivos andaluces no gozan de consideración de “entes colaboradores de la Administración” ni tampoco disponen “ni ejercen funciones públicas delegadas”.

6.- Artículo 18: Reconocimiento autonómico de utilidad pública.

El apartado e) del referido artículo, relativo a la participación en competiciones de ámbito nacional del club andaluz que opte a dicha consideración pública, entendemos puede resultar innecesaria por posible discriminación o arbitrariedad. En tal sentido cabe señalar que no hay corresponsabilidad respecto de los requisitos para tal condición con el artículo 32 de Asociaciones de utilidad pública, fijado por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho de asociación (BOE núm. 73, de 26 de marzo), en tanto que no se incluye ni exige que la declaración de utilidad pública estatal, que el solicitante o merecedor de la misma, ejerza su actividad en ámbito estrictamente nacional. Luego si no lo exige la norma de mayor rango, entendemos que la exigencia de efectuar o realizar actividad deportiva de ámbito nacional pudiera resultar una penalización para aquellos clubes deportivos que desarrollen con igual mérito su actividad promotora de fomento y demás, en el ámbito estrictamente autonómico. Por lo que, en todo caso, la exigida participación deportiva en alguna competición de ámbito estatal para optar a la consideración meritoria de utilidad pública en Andalucía deberá operar en el mejor de los casos como un mérito a tener en cuenta, pero nunca como un requisito esencial e imprescindible para la obtención de tal calificación. Por lo que dicho requisito entendemos debe ser suprimido.

Por similares motivos, y por evidentes razones de concordancia, debiera ser igualmente suprimida la letra f) del punto 6 del referido artículo, por el que se exige como prueba documental, el certificado correspondiente de participación en competición estatal, emitido por la federación deportiva española que corresponda.

De igual forma, y con ánimo de certeza y claridad del texto, en relación con el punto 4 de la citada norma, a fin de garantizar la máxima seguridad jurídica sobre la declaración de utilidad pública y sus efectos, es del todo recomendable que se especifique en dicho cuerpo legal, además de la compatibilidad con la declaración de utilidad pública estatal ya expresamente reconocida, su posible homologación o convalidación con la declaración de utilidad pública de Andalucía, y en su caso, el mecanismo de acreditación, validación u homologación.

7.- Artículo 26: Título habilitante.

Según la redacción del punto 1 del citado artículo, el *título habilitante* es la autorización federativa que permite al deportista de ocio participar en competiciones no oficiales y en actividades deportivas de ocio organizadas por la federación, según de expresa, “siempre que lo prevean sus estatutos”.

Así pues, según su literalidad, se deja en manos de las federaciones y a su libre discrecionalidad, un derecho reconocido en la vigente Ley del Deporte andaluza, de modo que un club deportivo de ocio que no encuentre su actividad recogida en una determinada federación no podrá nunca participar en actividades deportivas federadas, salvo que, graciosamente, así lo quiera disponer dicha federación.

En consecuencia, se impone, por imperio de la ley, determinar con mayor claridad si es o no obligación de las federaciones andaluzas desarrollar el ejercicio de este derecho reconocido a los deportistas de ocio, y en su defecto, quien y como puede organizar eventos deportivos con dicho título habilitante para participar en competiciones no oficiales. O si tal facultad puede concederse a Confederaciones Deportivas, Secciones Deportivas o cualesquiera otra entidad asociativa de cualquier índole o cualquier organizador de actividades deportivas de ocio que, establezca las condiciones de participación, la cobertura de asistencia sanitaria y de riesgos por responsabilidad civil de los participantes y los espectadores, de conformidad con lo establecido en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, y demás normativa de aplicación, tal y como tiene prevenido el punto 5 del artículo 28 de la vigente Ley del Deporte.

Nuestro parecer es que las federaciones deportivas, por razón de entidades colaboradoras de la Administración deportiva, afinidad, fines y especialización, se encuentran con la obligación de atender la práctica deportiva de competición oficial y no oficial, y por tanto el deporte de ocio. La oficial por expreso designio del legislador deportivo como titular de la concreta función pública delegada de la expedición de licencias deportivas. Y la *no oficial* por la obligación intrínseca y orgánica de fomento

del deporte que le viene impuesta a las federaciones por su propia naturaleza constitutiva y porque gozan de plena capacidad de obrar en cumplimiento de sus fines, que son la práctica, desarrollo y promoción de las modalidades deportivas propias de cada una de ellas, como así se contiene en el punto 1 del artículo 57 de la Ley del Deporte andaluza. Y ello, con independencia de otros posibles organizadores de eventos deportivos del tejido deportivo andaluz, con o sin ánimo de lucro, con capacidad o finalidad de organizar eventos deportivos no competicionales y no oficiales. Luego el presente artículo 26 debe necesariamente que reparar en todos estos extremos a fin de garantizar la seguridad jurídica que se espera de una Ley pionera en la regulación del deporte de ocio, a fin de que reglamentariamente de oportuno cumplimiento al espíritu y cuerpo de la Ley de Deporte de Andalucía.

8.- Artículo 57.2 sobre periodo en funciones.

Se establece en dicho punto la permanencia en sus funciones de todos los miembros de los órganos y representación de las federaciones, una vez convocado el proceso electoral, hasta la toma de posesión por sus sucesores, con excepción de la Asamblea General, que se disolverá en el momento mismo de la convocatoria electoral.

En tal sentido nada de esto dice la Ley sobre este particular, sino que además señala, según lo establecido en el 59.2, que la Asamblea general es el órgano supremo y de gobierno de la federación. Luego de producirse la dicha disolución, se incurriría en la incongruencia de dejar desprovista a la federación de su máximo órgano de gestión y representación, de manera que, si el resto de los órganos inferiores de la gestión y representación de la Federación permanecen en funciones, igualmente debería suceder con la Asamblea General, que es el máximo órgano federativo que legitima la funcionalidad del resto del órgano. Ya que de lo contrario se entraría en grave contradicción e incongruencia insalvable, cuando se establece en el punto 2 del citado artículo 59, que “Son órganos de representación y de gobierno necesarios de las federaciones deportivas andaluzas la Asamblea General, la persona titular de la Presidencia y la Junta Directiva”. De suerte que si Presidencia y Junta Directiva, por su carácter necesario, quedan en funciones, la Asamblea General, que es además de necesario, órgano supremo, debe quedar igualmente en funciones, pues de lo contrario, si se disuelve, queda absolutamente desprovista de su necesidad y soberanía. Circunstancia que, dicho sea de paso, es la más proclive y susceptible de manipulación, cuando, sobre todo, se prevé elección a cargo de Presidencia de nuevo presidente, cuando éste se presente a reelección. Sobradas experiencias al respecto nos constan, de la desventaja que produce al común de los asambleístas el vacío de poder y desequilibrio de representación producido, tras la desaparición de la Asamblea General, en esto críticos momento de nuevo proceso electoral. La Asamblea General solo se disuelve en aplicación del artículo 65 de la vigente Ley. Razón la que no es concebible que en un proceso electoral quede disuelta la Asamblea General en el proceso electoral, pues como mínimo, queda en funciones.

Por tanto, la expresión del artículo 57.1 relativo a disolución de la Asamblea General tras convocarse periodo electoral, debe ser entendido y concebido como periodo transitorio hasta la nueva designación por elección de nuevos miembros y ésta quedar como órgano supremo de la Federación, también en funciones, pero no disuelta.

9.- Artículo 62.1.b) hace referencia a la parte alícuota patrimonial.

Esta referencia creemos que no tiene sentido en las federaciones o en cualquier asociación. Se trata de unos términos utilizados para las entidades mercantiles, debe aplicarse el criterio de proporcionalidad que corresponda.

10.- Artículo 67.1 Los actos inscribibles.

67.1.- Es la inscripción en el Registro de entidades deportivas constitutiva o no. Este apartado no lo deja claro.

Creemos conveniente y necesario recoger en la norma, que es el Registro formal del Club, el acto administrativo de carácter constitutivo.

67.2.- Además de especificar este apartado que actos tienen que inscribirse, se debería especificar cuál de los actos inscribibles, tiene carácter constitutivo.

Es importante, que la información de las entidades deportivas sea veraz y por tanto cualquier modificación en los órganos de gobierno se tienen que inscribir para que surtan efectos y así garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones de los clubes deportivos.

Entendemos que su importancia viene refrendada por el apartado 3 de este artículo 67, siendo un requisito obligatorio para participar en competiciones oficiales.

Pero no nos debemos quedar solo en las competiciones oficiales, la seguridad jurídica es fundamental para el movimiento social y deportivo que repercute en multitud de situaciones y generan un número importante de problemáticas.

Por tanto, la enmienda que proponemos es la de introducir el carácter obligatorio de inscripción de los actos del 67.2 allí relatados y en algunos casos el carácter constitutivo de su inscripción.

Ponencia informativa, con sugerencias de nueva redacción, sobre el artículo 65 de la disposición, a cargo del vicepresidente de la AADD, Dr. Javier Gómez Vallecillo

Las asociaciones son entidades sin ánimo de lucro que se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para alcanzar unos fines lícitos de interés general o particular. Cuyo acuerdo constitutivo esta debidamente formalizado y regulado.

Obedece a un derecho fundamental, amparado por el artículo 22 de la Constitución Española, en directa conexión, entre otros, con el artículo 21 del mismo cuerpo legal, que reconoce el derecho de reunión, y los artículos 17, sobre derecho a la libertad y a la seguridad y el artículo 20 de libertad de expresión.

Tales facultades concebidas como derechos fundamentales y libertades públicas, comprende la libertad de crear asociaciones sin necesidad de autorización administrativa previa. Por ello, con el otorgamiento del acta fundacional la asociación adquiere personalidad jurídica y capacidad de obrar, sin perjuicio de su inscripción posterior en el registro competente, a los solos efectos de publicidad.

El régimen jurídico de dichas entidades, viene delimitado por la Ley Orgánica 1/2002, del Derecho de Asociación, y de la misma se desprende que se trata de un derecho de asociación consistente en la libertad de los ciudadanos para constituir, en conjunción con otros ciudadanos, agrupaciones de carácter permanente destinadas a la consecución de diferentes fines (sociales, políticos, económicos...), salvo aquellos que

sean exclusivamente de carácter lucrativo. De suerte que tres son las características que diferencian la asociación de otras figuras: a) la constitución formal de la misma (identificación de miembros, fines, organización...), b) su carácter permanente (que la distingue de la reunión) y c) la falta de ánimo de lucro, que la separa de las sociedades mercantiles.

Las asociaciones, a su vez, pueden agruparse para constituir federaciones, confederaciones y uniones. En concreto, las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones son entidades de segundo grado, cuyos promotores y miembros son personas jurídicas de naturaleza asociativa previamente inscritas en los registros generales de asociaciones. Se entiende por federaciones y uniones las entidades integradas por tres o más asociaciones, y confederaciones las entidades integradas por tres o más federaciones.

Esta introducción, nos sirve para plantear el adecuado discernimiento, que a nuestro modo de ver, debe emanar de la regulación en el Proyecto de Entidades Deportivas que consideramos, la regulación propuesta para la figura de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas.

Dicha figura se encuentra regulada en el artículo 65, que literalmente dice así:

Artículo 65. *La Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas.*

1. Las federaciones deportivas podrán constituir la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas como órgano de representación y defensa de los intereses comunes de las mismas, conforme a las normas estatutarias que se establezcan y de acuerdo con la Ley 5/2016, de 19 de julio, y su normativa de desarrollo.

2. A los efectos de este decreto, la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas constituye requisito esencial para la constitución de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas. La resolución de inscripción, así como sus estatutos, serán publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. Su constitución requerirá la autorización expresa de la Dirección General competente en materia de entidades deportivas, previa solicitud mediante el modelo que se acompaña como anexo V, al menos, de las dos terceras partes de las federaciones deportivas andaluzas existentes en el momento de la iniciativa. Si la solicitud contuviera deficiencias u omisiones subsanables se requerirá su subsanación en el plazo de un mes. A la solicitud de constitución, las federaciones deportivas proponentes acompañarán acta fundacional, otorgada en documento público, y sus estatutos. Su extinción, en su caso y conforme a sus estatutos, causará la cancelación de oficio de su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

De apartado uno de la disposición se desprende que la federaciones deportivas andaluzas podran contituirse en Confedeación Andaluza de Federacines Deportivas, y que dicha Confederación podrá tendrá carácter de órgano representativo y de defensa de intereses comunes. Remitiendose por extensión al artículo 66.1 de la vigente Ley del Derporte de Andalucía, a modo de fundamento legal. De su lectura puede deducirse las siguientes apreciaciones:

- a) Que la disposicion no pone límites al número de federaciones que puedan consituirse en Confederación, modalidades deportivas de las que puedan ser titularas, o cualquiera otra condición que caracteriza y define la personalidad jurídica de las federaciones, su modalidad, volumen o constitución.
- b) Tampoco limita expresamente el número de Confederaciones Andaluzas de Federaciones Deportivas, pues aunque se refiere a la misma en sigurlar y con un artículo determinativo, con la expresión «*podrá constituirse “la” Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas*». Tal expresión debe entenderse sin carácter limitativo, puesto que aún teniendo la Comunidad Autónoma competencias exclusivas en materia de deporte, dicha facultad no ampara la regulación de del derecho de asociación constitucionalmente regulado, y desarrollado por disposición con rango de ley orgánica. Luego, a nuestro modo de ver, no debería entenderse que en el tejido asociativo deportivo andaluz, solo cabe una única Confederación de Federaciones Deportivas, ya que éstas tienen y conservan el derecho de libre asociación por razón de afinidades, objetivos y materias de específica consideración, desarrollo y defensa, como puedan ser una hipotética Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas de deportes de invierno, de deportes en medio natural, o de deporte adaptado.

En relación con el segundo punto, resulta evidente la manifiesta imposición del carácter constitutivo que se otorga al acto registral de la Confederación, previamente creada en acto público y de al que da fe notarial, el documento constitutivo así exigido.

Surge aquí un punto de controversia, de suerte, que a diferencia de la mera constatación registral que se impone en la Ley orgánica de asociaciones para el reconocimiento de una Confederación en el ámbito nacional, aquí se advierte que la exigencia registral es tan esencial, que es un requisito de la propia constitución, lo que podría interpretarse, en cierta medida, una aparente incongruencia con atisbos de abuso de derecho. Incongruencia porque sería un reforzamiento innecesario de acto público, ya que previamente al Registro, los interesados han debido formalizar un acta fundacional otorgada en documento público, junto con los estatutos por la que se ha de gobernar; y un cierto abuso de derecho, por cuanto pudiera considerarse una injerencia no justificada en el derecho de libre asociación de los agentes sociales deportivos, constituidos en federaciones. Pues es obvio, que una única Confederación sí podría defender intereses comunes, pero muy difícilmente, los intereses particulares de su multiplicad de miembros, tan distintos como actividades y medios deportivos emplean; y en que en ocasiones incurren incluso en conflicto de intereses, como pueda suceder con el desarrollo del proceso de integración de deportistas con discapacidad en el resto de modalidades deportivas, o la defensa de derecho de los animales y los deportes con implementos deportivos basados en la directa participación de animales en la práctica deportiva, como palomas, galgos, caballos, halcones o perros y que nada tienen que ver con el atletismo, la natación o el fútbol.

Finalmente en el punto tercero del artículo que alegamos, se introducen el procedimiento constitución y requisitos de inscripción de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, consistente en:

- a) Autorización expresa de la Dirección General competente.
- b) Solicitud mediante modelo formalizado
- c) Un mínimo de dos tercios de las federaciones deportistas existentes al momento de la solicitud.
- d) Documentos acreditativos de la constitución de dicha federación, que deberá ser con acta fundacional elevada a escritura pública, así como los estatutos de autogobierno, que igualmente deberán formar parte del cuerpo escritural del acta fundacional.

La actual redacción de la disposición puede plantear varios interrogantes e incurrir en posible incongruencia. La primera, es que da a entenderse que solo se autorizará en su caso, una única Confederación, cuestión que ya es discutible en sí misma, por dos razones:

1. Porque la Administración ya cuenta, dispone y regula un interlocutor válido con derecho de representación y como órgano colegiado de participación de las federaciones deportivas, para todos los asuntos de su interés, como es el *Consejo Andaluz de Federaciones Deportivas*. Órgano que resulta obvio se encuentre absolutamente bajo la disciplina legal y regulación administrativa por razón de Autoridad de donde emana, que es la propia Administración Deportiva.
2. La Confederación, como tal no es una entidad deportiva al uso, aunque su fundación se hace para fines de promoción deportiva, que es distinto. Como distinta es su naturaleza jurídica, que obedece a iniciativas de derecho privado de carácter asociativo. Limitar el número de Confederaciones es como limitar el

número de clubes deportivos a los que pueda optar una determinada Federación, y siempre que cumplan los requisitos constitucionales, deben de ser admitidos en la federación.

El segundo de los puntos críticos que presenta el articulado que venimos comentando es el alusivo al requisito previo de la formalización del acuerdo de constitución de la Confederación en documento público, junto con los estatutos para su gobierno, con la exigencia insalvable de que pase previamente por Notaría; lo que supone un control de legalidad de veracidad y certeza, que ya en sí da fe del propio contenido de acta fundacional y estatutos. Luego ya está legalmente constituida.

Este acto constituyente es el que se dice después, que será objeto de autorización, y hete aquí la incongruencia, puesto que no se puede constituir dos veces el mismo acto, sino dar fe de este o constatación del hecho. Luego carece de sentido, autorizar un acto que ya lo está por otra “administración”, como es la notarial. Así las cosas, el requisito será en todo caso para su inscripción registral, pero no parece tanga sentido que lo sea para el acto constitutivo. Más, si cabe, tratándose de una entidad de derecho privada en toda su extensión y concepción, sin ninguna función pública delegada y sometida a potestad de autorregulación. Por tal motivo, propones de la forma que sigue su nueva redacción.

Art. 65. Confederaciones Andaluzas de Federaciones Deportivas

1. Las federaciones deportivas andaluzas podrán constituirse en Confederaciones Andaluzas de Federaciones Deportivas, como entidad de representación y defensa de sus intereses comunes, de conformidad con la legalidad vigente.
2. A los efectos de este decreto, la Confederación así constituida deberá tener un apelativo propio, por materia, contenido o temática común de modalidades, seguido de la expresión Confederaciones Andaluzas de Federaciones Deportivas. Para ser entendida y disponer de la condición y calificación de entidad deportiva de Andalucía, y disfrutar de los beneficios que pueda aparejar su condición, será imprescindible su inscripción en el Registro Andaluza de Entidades Deportivas. La resolución de inscripción, así como sus estatutos, serán publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
3. La solicitud de inscripción será formalizada mediante modelo normalizado y deberá estar constituida por al menos cuatro federaciones deportivas andaluzas existentes en el momento de la iniciativa. Si dicha solicitud contuviera deficiencias, se requerirá su subsanación en el plazo de un mes. A la solicitud de inscripción deberá acompañarse necesariamente acta fundacional de sus promotores, otorgada en escritura pública, junto a sus correspondientes estatutos. Su extinción o disolución, voluntaria o judicial, aparejará simultáneamente la cancelación automática y de oficio de su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportiva.

Consta el presente informe con las aportaciones esgrimidas de un total de 12 folios, convenientemente registrado en el registro de salida de la Asociación, para su presentación vía telemática al órgano convocante.

Y para que así conste, es dado en Córdoba, a ocho de julio de 2020.

Fdo. Ildefonso Manuel Gómez Padilla
Secretario

GOMEZ PADILLA
ILDEFONSO
MANUEL -
[REDACTED]

Firmado digitalmente
por GOMEZ PADILLA
ILDEFONSO MANUEL -
[REDACTED]
Fecha: 2020.07.08
18:38:59 +02'00'

VºBº.

Fdo. Antonio Romero Campanero
Presidente

NOMBRE ROMERO
CAMPANERO
ANTONIO RAFAEL
- NIF [REDACTED]

Firmado digitalmente por
NOMBRE ROMERO
CAMPANERO ANTONIO
RAFAEL - NIF [REDACTED]
Fecha: 2020.07.09 09:35:52
+02'00'